



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	María Eugenia Ramírez Espinosa Claudia Yanet Salazar Vallejo Marta Nelly Salazar Valencia (sucedida por su hija Sandra Patricia Giraldo Salazar) Luz Mery Agudelo Aguirre Farley Patricia Vallejo García Rosa Amelia Ocampo Ceballos Doralba Duque Quiceno
DEMANDADOS	Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil “Caperucita” – ICBF
VINCULADO	Seguros Generales Suramericana SA
RADICADO	05 001 31 05 012 2015 01928 01
TEMA	Relación laboral - Solidaridad
DECISIÓN	Confirma y modifica sentencia

Medellín, cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anunciada, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín procede a resolver el recurso de apelación interpuesto en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adopta el proyecto presentado por el magistrado ponente, que se traduce en la siguiente sentencia.

Pretensiones

Se solicitó que se declarara que entre las demandantes María Eugenia Ramírez Espinosa, Claudia Yanet Salazar Vallejo, Marta Nelly Salazar Valencia, Luz Mery Agudelo Aguirre, Farley Patricia Vallejo García, Rosa Amelia Ocampo Ceballos y Doralba Duque Quiceno, y la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita se celebró un contrato de trabajo a término fijo a partir del 16 de enero hasta el 31 de julio de 2014; que dichos contratos se prorrogaron por un periodo igual al inicialmente pactado; que el

ICBF es solidariamente responsable del pago de las obligaciones laborales que se desprenden de esos contratos.

En consecuencia, que se condene en forma solidaria al ICBF y a la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita, al pago de los salarios adeudados entre el 16 de julio y el 30 de septiembre de 2014; las cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones causadas durante toda la relación laboral; la prima de servicios ocasionada entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2014; los aportes adeudados a la seguridad social en salud y pensión; la sanción por el no pago de los intereses a las cesantías; la indemnización por despido sin justa causa; la indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales; la indexación y las costas procesales.

Hechos

Como supuestos fácticos se relató que el Gobierno Nacional para la protección de la infancia promovió un programa a nivel nacional denominado “de cero a siempre” dirigido por el ICBF, en el cual para su desarrollo contrató a terceros que fueran operadores de los servicios para los cuales se desarrolló el objeto del programa.

Se sostuvo que en el municipio de Guatapé (Antioquia), el ICBF Seccional Antioquia, delegó la operación a la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil "Caperucita", pero no obstante ello, el ICBF ejercía control y vigilancia directa sobre la asociación y los empleados, denominados control técnico, de familia, de emergencias, de talento humano y de recursos financieros.

Se manifestó que para el desarrollo del convenio celebrado entre las demandadas, la asociación, en calidad de empleadora, celebró contratos de trabajo con las accionantes, estipulando como fecha inicial el 16 de enero de 2014 y final el 31 de julio de la misma calenda; que prestaron sus servicios en el municipio de Guatapé; que realizaban su labor de manera personal y directa, y bajo continuada subordinación; que su horario de trabajo era de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

de lunes a viernes; que los cargos que desempeñaron y sus salarios fueron los siguientes:

Nombre	Cargo	Salario
María Eugenia Ramírez Espinosa	Coordinadora y/o directora	\$1.287.000
Claudia Yanet Salazar Vallejo	Docente y/o jardinera	\$917.000
Marta Nelly Salazar Valencia	Docente y/o jardinera	\$917.000
Luz Mery Agudelo Aguirre	Docente y/o jardinera	\$917.000
Farley Patricia Vallejo García	Auxiliar Administrativo	\$616.000
Rosa Amelia Ocampo Ceballos	Docente y/o jardinera;	\$917.000
Doralba Duque Quiceno	Auxiliar de servicios generales	\$616.000

Se afirmó que dichos contratos se prorrogaron por un periodo igual al inicialmente pactado, ya que, aunque el empleador les había preavisado la terminación del contrato de trabajo con la antelación debida, quedó sin efecto porque la asociación demandada les informó que continuarían laborando, siendo esta continuidad en los puestos de trabajo avalada por funcionarios del ICBF. Además, que en agosto de 2014 la asociación hizo entrega de un documento donde se plasmó que la prórroga sería por 2 meses, con fecha de elaboración del 31 de julio de 2014, el que no tiene validez en razón de que se estaba ejecutando la prórroga inicial.

Se indicó que la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Caperucita, cesó el pago de sus salarios y prestaciones sociales el 16 de julio de 2014, además de que realizó el cierre total de operaciones el 30 de septiembre de 2014, finalizando las relaciones laborales en esta fecha, sin que se les haya cancelado dichos conceptos. Por lo anterior, el 16 de junio de 2015 (salvo Farley Patricia Vallejo García que lo hizo el 20 de agosto de 2015) se presentó reclamación administrativa ante el ICBF – Seccional Antioquia, solicitando el reconocimiento y pago de los derechos laborales adeudados, recibiendo que respondió de manera negativa.

Finalmente se dijo que la personería jurídica de la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil "Caperucita" fue reconocida por el ICBF según Resolución 1786 de 28 de junio de 1988, y que esta asociación está vinculada al sistema nacional de bienestar familiar del ICBF.

Contestación

El ICBF expuso que era cierto lo concerniente a la estrategia nacional de atención integral a la primera infancia, pero aclaró que la delegación no es una figura que se enmarque dentro de las modalidades de contratación estatal, por lo cual, la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita fue escogida legalmente a través de contratación directa mediante selección objetiva, la cual se inició por invitación pública, con la aceptación y carta de interés por parte de los operadores, culminando con un contrato de aportes, por medio del cual se escogió a la entidad con la idoneidad, experiencia y capacidad financiera necesaria para dar cumplimiento a los programas que deban desarrollar.

Acto seguido negó que el ICBF ejerciera control y vigilancia directa sobre la asociación y los empleados, sino que, con base en sus obligaciones contractuales, debía realizar vigilancia y control en la ejecución de los contratos.

Frente a los demás supuestos expresó que no le constaban. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso como excepciones de mérito las que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva; imposibilidad jurídica del ICBF para celebrar contratos de trabajo; ausencia de relación laboral, legal o complementaria entre las partes; inexistencia o falta de causa para demandar; cobro de lo no debido; inexistencia de la obligación; inexistencia de solidaridad prestacional; ausencia de solidaridad patronal y prescripción.

Finalmente llamó en garantía a la aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A., conforme a las pólizas suscritas.

De otro lado, la *Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita* dio respuesta a través de curadora *ad litem*, quien manifestó que es de público conocimiento lo concerniente a la estrategia nacional de atención integral a la primera infancia, y que en efecto el programa es dirigido por el ICBF.

Dijo desconocer las formas de contratación que tiene el ICBF, así como los demás supuestos expresados en la demanda, pero aceptó los hechos respecto de los cuales existía prueba documental que se refiere a los contratos celebrados entre las partes. Se resistió a lo reclamado, y propuso las excepciones de fondo denominadas cobro de lo no debido; inexistencia de las obligaciones; prescripción y buena fe.

Finalmente, *Seguros Generales Suramericana S.A.* explicitó que no le constan los hechos expuestos, aclarando que muchos corresponden realmente a calificaciones jurídicas, luego de lo cual se opuso a las pretensiones de prórroga del contrato y solidaridad del ICBF, y formuló como excepciones las de inexistencia de solidaridad por parte del ICBF y buena fe por parte de la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita.

En cuando al llamamiento en garantía, expuso que no se funda en hechos, por lo que se opuso al mismo bajo el argumento que la póliza de cumplimiento consagra diferentes amparos, de los cuales solo uno podría ser aplicable en una reclamación como la que se pretende en el proceso, el pago de salarios y prestaciones sociales. Propuso como medios exceptivos los que denominó: ineptitud del llamamiento en garantía por no existir pretensión alguna en contra del llamado en garantía, límite de responsabilidad de Seguros Generales Suramericana SA en su condición de asegurador, existencia de otros procesos judiciales que pueden disminuir o agotar el valor asegurado, e inexistencia de cobertura por actuaciones imputables al ICBF.

Sentencia de primera instancia

El Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 14 de febrero de 2022, declaró que entre las demandantes María Eugenia Ramírez Espinosa, Claudia Yanet Salazar Vallejo, Marta Nelly Salazar Valencia (QEPD) sucedida procesalmente por su hija Sandra Patricia Giraldo Salazar, Luz Mery Agudelo Aguirre y Doralba Duque Quiceno y la Asociación de Padres de Familia de los Niños

Usuarios del Hogar Infantil “Caperucita” existió un contrato de trabajo a término fijo entre el 16 de enero y el 30 de septiembre de 2014; en el caso de Rosa Amelia Ocampo Ceballos, entre el 17 de enero y el 30 de septiembre de 2014; y de la señora Farley Patricia Vallejo García, desde el 16 de enero hasta el 31 de julio de 2014.

Condenó a la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil “Caperucita” a reconocer y pagar a las actoras, los siguientes conceptos:

Nombre	Salarios adeudados	Prima de servicios 2°. periodo	Vacaciones	Cesantías	Intereses cesantías
Maria Eugenia Ramirez Espinosa	\$3'217.500	\$321.750	\$455.813	\$911.625	\$77.488
Claudia Yanet Salazar Vallejo	\$2'292.500	\$247.250	\$324.771	\$700.542	\$59.546
Marta Nelly Salazar Valencia (sucesora procesal)	\$2'292.500	\$247.250	\$324.771	\$700.542	\$59.546
Luz Mery Agudelo Aguirre	\$2'292.500	\$247.250	\$324.771	\$700.542	\$59.546
Farley Patricia Vallejo García	\$308.000	\$172.000	\$218.167	\$487.333	\$41.423
Rosa Amelia Ocampo Ceballos	\$2'292.500	\$247.250	\$323.497	\$697.794	\$59.080
Doralba Duque Quiceno	\$1'540.000	\$172.000	\$218.167	\$487.333	\$41.423

Asimismo, dispuso el pago indexado de las vacaciones al momento de su cancelación, y ordenó a la asociación demandada cubrir los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por los periodos antes mencionados, de cara a las AFP donde las demandantes acrediten estar afiliadas. Además, precisó que el pago de estas cotizaciones se haría de acuerdo a los cálculos que efectuó la respectiva entidad, incluyendo los intereses de mora por el pago tardío del aporte sobre los salarios mensuales (IBC) acreditados: María Eugenia Ramírez Espinosa: \$1.287.000; Claudia Yanet Salazar Vallejo, Marta Nelly Salazar Valencia, Luz Mery Agudelo Aguirre y Rosa Amelia Ocampo Ceballos: \$917.000; Farley Patricia Vallejo García y Doralba Duque Quiceno: \$616.000.

Condenó al pago de la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del CST a razón de un día de salario por cada día de retardo por 24

meses, así: María Eugenia Ramírez Espinosa: \$30.888.000; Claudia Yanet Salazar Vallejo, Marta Nelly Salazar Valencia, Luz Mery Agudelo Aguirre y Rosa Amelia Ocampo Ceballos \$22.008.000 para cada una; Farley Patricia Vallejo García y Doralba Duque Quiceno: \$14.784.000 para cada una. Además, que a partir del 1°. de octubre de 2016 inclusive, y desde el 1° de agosto de 2016 inclusive en el caso de Farley Patricia Vallejo García, hasta la fecha en que se produzca el pago, se causaban intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera.

Absolvió a la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil “Caperucita” de las demás pretensiones incoadas en su contra por las aquí demandantes; al ICBF de todas las pretensiones contenidas en la demanda y a Suramericana S.A. de las que hacen parte, tanto del libelo genitor como del llamamiento en garantía.

Declaró no próspera la excepción de prescripción. Condenó en costas a la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil “Caperucita” y a favor de la parte demandante. Y al ICBF a favor de Suramericana S.A.

Para adoptar tal decisión, consideró que con la prueba documental se demostró la existencia de los contratos de trabajo entre las demandantes y la asociación demandada, los que fueron prorrogados solo hasta el 30 de septiembre de 2014 como se desprende de los documentos que fueron suscritos por las accionantes aceptando voluntariamente dichas condiciones, por lo que no procede la indemnización por despido injusto.

Sobre la indemnización del artículo 65 CST, expuso que se evidenció la mala fe del actor al no pagar las prestaciones sociales ni los salarios adeudados al terminar la relación laboral ni durante la ejecución de la misma, sin que haya justificación para ello, dando lugar a esta sanción.

En cuanto a la solidaridad expuso que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sentencias CSJ SL4430-2018 reiterada en la CSJ SL2370-2021, en este tipo de procesos, el prestador del servicio es el responsable de las obligaciones

surgidas con el personal que vincula para ejecutar el objeto contractual sin que haya cabida a la responsabilidad solidaria en vista de la especial naturaleza del contrato de aportes y de la prestación del servicio del ICBF que es público.

Apelaciones

Demandante

Manifestó que frente a la señora Farley Patricia, de las declaraciones rendidas por las demandantes y la testigo, se demuestra que igual que las demás, esta laboró hasta el 30 de septiembre de 2014, por lo que las condenas impuestas deben tener como fecha de finalización esta data.

Sobre la prórroga del contrato de trabajo dijo que, aunque solo se dio por 60 días, fue notificada a las demandantes en agosto de 2014 mediante comunicación con fecha del 31 de julio de 2014, es decir, sin cumplir el requisito del artículo 42 del CST, ya que se notificó la finalización del contrato con un mes de antelación, pero para esa fecha ya el contrato ya se había prorrogado por un término igual al inicialmente pactado.

Manifestó que en el presente caso se cumplen los presupuestos de hecho para declarar la responsabilidad solidaria respecto del ICBF de las condenas impuestas a la Asociación Caperucita, ya que de acuerdo a la sentencia CSJ SL 4430 de 2018, el contrato de aportes es atípico, sin embargo, no se exceptúa de las normas generales que rigen las relaciones laborales, ya que estas son de rango constitucional. Dijo que respeta la interpretación que hace la CSJ acogida por la juez, sin embargo, se aparta de ella ya que vulnera los derechos laborales de las trabajadoras que son mujeres que se dedican al cuidado y se encuentran en situación de vulnerabilidad frente al beneficiario de la obra que en este caso es el ICBF, quien se sustrae del pago de las acreencias laborales frente a los operadores que contrata para el cumplimiento de sus objetivos. Citó el inciso final del artículo 127 del Decreto 2188 de 1979, que regula el contrato de aporte, donde se establece que, pese a que las actividades son realizadas por los

operadores, estos no escapan de la legislación laboral y se enfatiza en el control que tiene el ICBF en la ejecución de los contratos, por lo que no puede sustraerse de las relaciones laborales.

Afirmó que la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil “Caperucita” actualmente no existe por lo que a pesar de que se emitan condenas en su contra, es imposible el pago real de las acreencias laborales, lo que desconoce los derechos de las demandantes.

*Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil
“Caperucita”*

Manifestó que de la prueba documental aportada se evidencian los contratos de trabajo celebrados por las demandantes con la asociación, pero en virtud de un contrato de aportes celebrado con el ICBF se dispuso la creación de los hogares comunitarios, siendo este instituto quien trazaba las directrices y giraba el dinero para el funcionamiento, impartía las órdenes a la asociación de padres, por lo cual la asociación no es la verdadera empleadora de estas demandantes y por ende no es la responsable del pago de los derechos laborales.

Dijo que los hogares comunitarios del ICBF fueron desarrollados por la Ley 89 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1340 de 1995, señalando que el trabajo de quien participa en estos programas es una contribución voluntaria con el fin de asistir a los niños.

Consideró que si bien es cierta la existencia del contrato de aportes en este caso debe aplicarse la solidaridad entre el ICBF y la asociación, ya que el Decreto 1084 de 2015 y sus disposiciones sobre contratación del ICBF así lo permiten, no teniendo sentido que la asociación suscriba póliza de seguros con Suramericana S.A., quien fue llamada a este proceso, para cubrir riesgos en caso de que se aplicara la solidaridad.

Expresó que en la sentencia CC T021-2018 la Corte Constitucional analizó la solidaridad del artículo 34 del CST, para el pago de prestaciones sociales y acreencias laborales en casos donde existen contratos administrativos, y cita las providencias CC SU224-1998, CC

SU073-2019 y la CC SU079-2018, para indicar que puede declararse la existencia de un contrato realidad entre las madres comunitarias y el ICBF, y que basta con mirar el contrato de las demandantes con la asociación —los que se celebran en virtud del contrato realizado entre la asociación y el ICBF—, y en las cláusulas de dichos contratos laborales se establece que en todos los procesos administrativos, educativos dados en el hogar infantil debían seguir las directrices del ICBF, es decir, que la asociación no tenía autonomía para desarrollar el objeto contractual; es claro que el ICBF tenía una participación directa y era quien trazaba las directrices sobre el funcionamiento y cumplimiento contractual y estaba al tanto de los trabajadores, los capacitaba, tenían que cumplir objetivos y metas trazados por el ICBF, por lo que se deben seguir los lineamientos de la Corte Constitucional para declarar la relación laboral directa entre las demandantes y el ICBF.

En cuanto a la sanción moratoria del artículo 65 del CST, indica que no existe mala fe de la asociación, ya que no canceló las obligaciones laborales al momento de la terminación del contrato de aportes, como lo indican las demandantes en sus declaraciones, debido a que el ICBF dejó de girar los aportes para atender el hogar, ya no habían insumos para atender a los niño, e incluso se requirió de la ayuda de la comunidad para ello: pero su sostenimiento a largo plazo fue imposible y se quedó sin recursos para su funcionamiento ya que al parecer el contrato con el ICBF terminó de manera abrupta pero la asociación tenía la convicción errada de que el instituto iba a continuar la labor social por lo que se prorrogaron los contratos laborales.

Alegatos

ICBF

Solicita que se confirme la sentencia de primera instancia, argumentando que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ SL44630-2018, hace un análisis pormenorizado del contrato de aporte, en el cual retoma decisiones del Concejo de Estado y de otra jurisprudencia sobre el mismo tema, concluyendo que en este tipo de convenios suscritos con el ICBF se

excluye de la aplicación de la figura jurídica contemplada en el artículo 34 del CST, por lo que solicita que se siga esta línea jurisprudencial y en aplicación del precedente vertical, absuelva al ICBF de toda responsabilidad.

Demandante

Insiste en los motivos que originaron el recurso de apelación y reitera que a través de las pruebas que fueron practicadas dentro del presente proceso, especialmente las declaraciones de las demandantes y el testimonio de la señora Luz Dary Gómez, se pudo establecer que la demandante Farley Patricia Vallejo García prestó sus servicios hasta el 30 de septiembre de la misma anualidad, al igual que el conjunto de sus compañeras.

Frente a la responsabilidad solidaria del ICBF y la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil “Caperucita”, señala que los numerales 1.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º y 14.º del artículo 21 de la Ley 7 de 1979 prevén que el ICBF tiene a su cargo ejecutar las políticas en cuanto al fortalecimiento de la familia y protección del menor, otorgar, suspender y cancelar licencias funcionamiento para establecimientos públicos o privados que se encarguen de esta labor y celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas para el desarrollo de su objetivo, lo que entiende, al concordar con lo estipulado en el artículo 34 del CST, que evidencia que la finalidad de las actividades realizadas dentro del centro de desarrollo infantil guarda estrecha correspondencia con el objeto social del ICBF y es esta entidad quien se beneficiaba de las actividades que se ejecutaban dentro de dicho establecimiento.

Dice que a pesar de que es evidente la relación que existe entre el desarrollo de las funciones de las trabajadoras de los centros educativos, y de los controles, lineamientos y direccionamiento que ejerce el ICBF en ello, quien además es el real beneficiarios de los objetivos que a través de estos establecimientos se logra, con fundamento en la sentencia CSJ SL 4430 de 2018 se viene desconociendo la aplicación de la figura de la solidaridad en los contratos de aportes, por lo que solicita al juzgador se aparte del

precedente ya que no existe una razón objetiva para que el contrato de aporte se sustraiga de la aplicación de la normatividad laboral que es de orden público y no es razonable que después de que el ICBF ha logrado los objetivos para el que fue creado en cuanto al cuidado de la niñez, a través del trabajo realizado por las demandantes, cuando estas se ven defraudadas en el pago de sus acreencias laborales, simplemente el instituto se sustraiga de su obligación como real beneficiario de la obra.

Dice que a pesar de que la negativa frente a la declaración de la responsabilidad solidaria de las demandadas se funda en la línea jurisprudencial que surgió a partir de la sentencia CSJ SL4430-2018, que fue proferida por la Corte Suprema de Justicia, dicha providencia es a todas luces inconstitucional y desafortunada para las mujeres que han trabajado en estos centros educativos.

Afirma que existe una decisión de segunda instancia del TSM, Sala Laboral dentro del proceso con radicado 05001310500920150095601, en el cual hay una similitud fáctica y de partes con el caso que nos ocupa, y en dicha providencia el cuerpo colegiado mencionó la relevancia de la sentencia CSJ SL1983-2019, en la cual se conceptualizó sobre la figura de la responsabilidad solidaria y en este sentido declaró la procedencia de dicha figura. Aunado a lo anterior, destaca que dentro del proceso con radicado 05001310500920150082501, se profirió decisión de segunda instancia en la cual retomaron los argumentos esbozados en el proceso judicial anteriormente mencionado.

Dice que debe evaluarse que el ICBF lleva a cabo su deber de vigilancia frente a las administradoras de los centros de desarrollo u hogares comunitarios de bienestar de forma deficiente y termina siendo cómplice de la vulneración de los derechos laborales, sin que por ello pueda endilgársele ninguna responsabilidad.

CONSIDERACIONES

Previo al análisis de las réplicas propuestas por las partes, resulta relevante advertir que se encuentra fuera del debate probatorio la existencia de la relación laboral entre las demandantes María Eugenia Ramírez Espinosa, Claudia Yanet Salazar Vallejo, Marta Nelly Salazar Valencia, Luz Mery Agudelo Aguirre, Farley Patricia Vallejo García, Rosa Amelia Ocampo Ceballos y Doralba Duque Quiceno, y la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita, regidas por contrato de trabajo a término fijo en el que se pactó como extremo inicial el 16 de enero de 2014 y final el 31 de julio de la misma calenda, salvo el caso de Rosa Amelia Ocampo Ceballos, que inició el 17 de enero de dicho año.

También se destaca que las partes no discuten la existencia de las acreencias laborales, la falta de pago de salarios desde el 16 de julio de 2014, y de los beneficios laborales como prima de servicios del segundo semestre de 2014, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones durante todo el lapso de la vinculación ya referida, y el pago de aportes a seguridad social, por tanto, frente a su causación no se hará referencia alguna.

Con base en lo anterior, se revisará la sentencia apelada.

Los problemas jurídicos que debe resolver la sala consisten en determinar: (i) si el contrato de Farley Patricia Vallejo García, se prorrogó hasta el 30 de septiembre de 2019, y en caso afirmativo, si se adeudan salarios y prestaciones sociales por ese tiempo; (ii) si los contratos laborales de las demandantes se prorrogaron por un término igual al inicialmente pactado, y en caso afirmativo, determinar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás conceptos que se deriven de ello; (iii) si existe responsabilidad solidaria del ICBF respecto de las condenas impuestas a la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita; (iv) si existe contrato realidad entre el ICBF y las demandantes y; (v) si procede la sanción moratoria del artículo 65 del CST.

(i) Prórroga del contrato laboral de Farley Patricia Vallejo García.

Es claro que el contrato de trabajo de esta demandante se ejecutó del 16 de enero al 31 de julio de 2014, como quedó establecido en el proceso y de conformidad con el contrato de trabajo obrante a folios 104 a 106 del PDF 002DemandayAnexos. Sin embargo, no se observa en el plenario el documento donde conste la prórroga al contrato como se evidencia en el caso de las demás demandantes, pero tampoco el preaviso efectuado por la asociación demandada donde figure la intención de no prorrogar el contrato, atendiendo a la solemnidad impuesta en el numeral 1.º del artículo 46 del CST, por lo que se entiende renovado por un término igual al inicialmente pactado en principio, pero en razón de que como se dijo desde el escrito de demanda, el cierre de operaciones de la asociación, en virtud de la terminación del contrato de aportes celebrado con el ICBF, se efectuó el 30 de septiembre de 2014.

Lo anterior, aunado a que las deponentes afirmaron al unísono que la señora Vallejo García, continuó laborando hasta esa fecha, por tanto hasta allí se entenderá el contrato de trabajo de esta accionante, y en razón de ello, se modificará la sentencia en este sentido para declarar que el extremo final de la relación laboral de Farley Patricia Vallejo García, fue el 30 de septiembre de 2014, y en consecuencia, se modificará el valor de los salarios adeudados, el que ascenderá a \$1.540.000, y la fecha desde la que se contabilizarán los intereses impuestos en virtud de la condena a la indemnización del artículo 65 del CST indicando que correrán desde el 1º. de octubre de 2016, de ser el caso.

En cuanto a las prestaciones sociales y vacaciones, no procede una reliquidación de cara a lo dispuesto en primera instancia, en la medida que, al verificar el cálculo realizado, se encuentra que se efectuó hasta el mes de septiembre de 2014, lo cual puede evidenciarse al confrontar su situación con la de Doralba Duque Quiceno, tal como quedó enunciado en el acápite *sentencia de primera instancia*.

- (ii) *Prórroga automática de los contratos laborales de las demandantes.*

Alega la demandante que, si bien se preavisó con la debida antelación la terminación de los contratos laborales al vencimiento del plazo inicial, esto es, el 31 de julio de 2014, posteriormente se les indicó que continuarían laborando, siendo ineficaz ese preaviso.

Respecto de este punto de apelación, se tiene que dentro del acervo probatorio se encuentran las prórrogas de los contratos laborales de las codemandadas con excepción de la señora Vallejo García, como se expuso. En dichos documentos, se plasmó que el contrato laboral se extendería hasta el 30 de septiembre de 2014 y se evidencia que fueron suscritos el 31 de julio de 2014, aunque las accionantes afirman que realmente fue en agosto, por lo que ya estaban prorrogados de manera automática los contratos.

Al efecto, observa la sala que en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes se acordó que la terminación de la relación laboral sería el 30 de septiembre de 2014, y que ello obedece a que hasta esa fecha estaría vigente el contrato de aportes celebrado entre las demandadas (fls.64-67 del archivo 012ContestacionICBF), sin que se alegue la existencia de algún vicio del consentimiento por las accionantes que pudiera dejar sin efectos ese acuerdo, como lo indicó la juez de instancia, por tanto, habrá de confirmarse la sentencia en este sentido.

(iii) *Responsabilidad solidaria del ICBF*

La demandante insiste en que se declare que el ICBF es responsable solidario de las condenas impuestas. Dicha solidaridad se encuentra regulada por el artículo 34 del CPLSS que indica que son verdaderos empleadores los que contraten prestación de servicios en beneficios de terceros y que serán solidariamente responsables los contratistas por emolumentos que tengan derecho los trabajadores.

De la prueba documental arrimada se evidencia que entre el ICBF y la Asociación de Padres Usuarios del Hogar Infantil Caperucita, se celebró el contrato de aportes 1692-2012 (PDF12ContestacionICBF fls.34-63), cuyo objeto fue «Atender a la primera infancia en el marco de la estrategia “De cero a Siempre”, de conformidad con las directrices,

lineamientos y parámetros establecidos por el ICBF, así como regular las relaciones entre las partes derivadas de la entrega de aportes del ICBF al contratista, para que este asuma con su personal y bajo su exclusiva responsabilidad dicha atención.», pactando sobre el plazo de ejecución que podría extenderse hasta el 31 de julio de 2014. Luego se extendió por el plazo de 2 meses —hasta el 30 de septiembre de 2014— a través de prórroga suscrita en la última fecha indicada (fl.64-67).

Para el desarrollo del objeto convenido, mediante contrato individual de trabajo vinculó a las demandantes, quienes, en razón de la naturaleza de su empleador, como entidad sin ánimo de lucro de beneficio social vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, adquirieron la calidad de trabajadoras particulares.

Así pues, al ser la entidad contratante, ICBF, un establecimiento público descentralizado dedicado a la prestación del servicio público del bienestar familiar, se encuentra sometida a lo establecido en el artículo 365 de la CP, por lo que su prestación debe hacerse conforme al régimen jurídico que fije la ley, siendo posible que lo realice de manera directa o indirectamente por aquel o por particulares, en todo caso el Estado conserva la regulación, el control y vigilancia de dichos servicios.

En ese orden de ideas, el ICBF tiene la facultad legal de celebrar los denominados contratos de aportes, destinados a proveer a una institución de utilidad pública o social, de los bienes que requiera para la prestación del servicio, actividad que se cumple bajo la *«exclusiva responsabilidad de la institución con personal de su dependencia»* en los términos de la Ley 7ª de 1979 y de los artículos 127 y 128 del Decreto 2388 de ese mismo año.

Frente al contrato de aportes, ha tenido la oportunidad de pronunciarse el Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección B, en sentencia del 30 de junio de 2016, radicado 2082765, la cual fue citada por la Corte Constitucional en Sentencia SU-273 de 2019, al resolver un asunto de madres comunitarias que solicitaban el reconocimiento de una relación laboral frente al programa de hogares comunitarios, indicando que el contrato de aporte es: *“una clase de convención atípica encaminada a*

que el ICBF -en virtud de su función de propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteja al menor de edad y le garantice sus derechos- suscriba con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales el manejo de sus campañas, de los establecimientos destinados a sus programas y en general para el desarrollo de su objetivo (...) El objeto de todo contrato de aporte es la provisión o entrega de bienes del ICBF a otra institución que se encarga de prestar el servicio público de bienestar familiar, a diferencia del contrato de prestación de servicios. (...) [E]l ingreso al sistema nacional de bienestar familiar no depende del acto de creación de la persona jurídica que presta el servicio de forma indirecta, sino de la prestación que esta realiza a partir de sus obligaciones contractuales. No se desprende de una formalidad, sino de la puesta en marcha de actividades que, bajo la dirección, vigilancia y control del ICBF, satisfagan la necesidad tantas veces mencionada de protección de la población infantil y de las familias en situación de vulnerabilidad”.

De acuerdo a lo anterior, debe decirse que el ICBF no posee frente a las madres comunitarias, la calidad de beneficiario o dueño de una obra dentro del contrato de aportes, puesto que se trata de un instrumento que el legislador dispuso con el fin de financiar a terceros que colaboran con la prestación del servicio de cuidado a la primera infancia.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ SL4430 de 2018, señaló que en este tipo de contratos *“el contratista asume la prestación del servicio público directamente a la comunidad mediante recursos del Estado. Es decir, el objeto del contrato se trata de una actividad sui generis regulada por normas especiales de derecho público y «solo están sujetas a las cláusulas obligatorias de todo contrato administrativo», art. 128 del D.2388 de 1979, «actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución» concluyendo de manera que de acuerdo a ello se “excluye la aplicación del artículo 34 del CST”*

A partir de lo expuesto, concluye el alto tribunal que no resulta posible hablar de responsabilidad solidaria de cara a lo estipulado por el artículo 34 del CST, determinando de igual manera y en forma clara que no existe ningún tipo de vínculo de naturaleza laboral entre el

trabajador del hogar infantil y el ICBF, lo cual comparte esta judicatura.

Adicionalmente, de acuerdo con los artículos 36 de la Ley 1607 de 2012 y 3° del Decreto 289 de 2014, las madres comunitarias no tienen la calidad de servidoras públicas, y sus servicios se prestan a las entidades administradoras de programas de hogares comunitarios, como lo es la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita, quien tiene la condición de empleador sin que se pueda predicar solidaridad patronal del ICBF, en los términos del referido artículo.

Así las cosas, lo manifestado anteriormente es plenamente aplicable al caso de autos, ya que la jurisprudencia de las corporaciones judiciales de cierre no puede ser sencillamente ignorada frente a situaciones similares a las falladas en ella, como se manifestó en la sentencia CC SU354-2017 y en la tutela con radicado 59370 de 2020. Y habiendo declarado la juez la inexistencia de la solidaridad en este caso, se confirmará la sentencia en este aspecto.

(iv) *Contrato realidad entre el ICBF y las demandantes*

Respecto a esta petición propuesta por la curadora ad litem de la asociación demandada, ha de indicarse que el artículo 281 del CGP, aplicable en materia laboral por disposición del canon 145 del CPTSS, señala, que: *«La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.*

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta...».

Con respecto a las facultades *ultra* y *extra petita*, indica el art. 50 del CPTSS que «el Juez de primera instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos,

cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados».

Conforme a las normas enunciadas, en el caso de estudio, en la demanda inicial no se solicitó la declaración de relación laboral directa con el ICBF, sino la responsabilidad solidaria de este instituto respecto de las acreencias laborales ocasionadas por el contrato de trabajo celebrado entre las demandantes y la asociación demandada, por tanto, la existencia de la relación laboral entre las demandantes directamente con el ICBF, es una pretensión ajena a la demanda, frente a la cual dicho instituto no pudo ejercer una defensa técnica, vulnerando el derecho fundamental al debido proceso y a las garantías de contradicción y defensa, de las partes, razón por la cual, no se pronunciará la sala respecto de este punto.

(v) Sanción moratoria del artículo 65 del CST.

La curadora afirma que la asociación no actuó de mala fe al no cancelar las obligaciones laborales al momento de la terminación del contrato de aportes ya que el ICBF dejó de girar el dinero para atender el hogar, el cual se quedó sin recursos para su funcionamiento ya que al parecer el contrato con el ICBF terminó de manera abrupta.

De conformidad con el artículo 65 del CST, esta indemnización procede a favor del trabajador una vez se ha presentado la terminación del contrato y el empleador ha incumplido con el pago de salario y prestaciones sociales, y jurisprudencialmente se dispuso que la aplicación de tal sanción no procede de manera automática, y por tanto la sanción debe obedecer a una conducta del empleador carente de buena fe (CSJ, SL Radicado 36192 de 2009)

En el caso concreto se evidenció que el empleador dejó de pagar salarios y prestaciones sociales a las demandantes aún antes de la terminación del vínculo laboral, sin que dentro del proceso haya evidencia de las razones que lo llevaron a incumplir con sus obligaciones, aclarando que las manifestaciones de la curadora son suposiciones sobre las razones que llevaron a la asociación a cesar los pagos, incumpliendo entonces esta accionada con la carga probatoria que le impone la ley de

demostrar su actuar de buena fe, como se indicó en la providencia apelada, por lo que se confirmará la sentencia en este sentido.

En conclusión, considera la sala que la sentencia que se revisa por vía de apelación merece ser confirmada con la modificación anunciada.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo indicó la juez. En esta instancia se condena en costas a la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita, por no salir avante su recurso. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 a favor de las demandantes.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por la Juez Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, el 14 de febrero de 2022, en el proceso instaurado por María Eugenia Ramírez Espinosa, Claudia Yanet Salazar Vallejo, Marta Nelly Salazar Valencia, Luz Mery Agudelo Aguirre, Farley Patricia Vallejo García, Rosa Amelia Ocampo Ceballos y Doralba Duque Quiceno en contra de la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita y del ICBF, modificando la parte resolutive en lo siguiente:

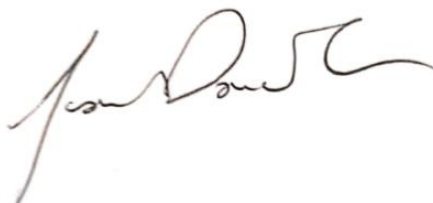
1. El numeral primero en cuanto a declarar que el contrato de trabajo de Farley Patricia Vallejo García finalizó el 30 de septiembre de 2014.
2. El literal a) del numeral segundo en relación con el valor de la condena impuesta a favor de Farley Patricia Vallejo García por concepto de salarios, suma que asciende a \$1.540.000
3. El literal d) del numeral segundo en cuanto a que los intereses moratorios ocasionados en razón de la imposición de la sanción

moratoria del artículo 65 del CST a favor de Farley Patricia Vallejo García, se causarán a partir del 1°. de octubre de 2016 inclusive.

SEGUNDO: Se condena en costas a la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita a favor de las demandantes. Se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

Se notifica lo resuelto por EDICTO. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación, se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados,



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ